



En Madrid, a 6 de Junio de 2011

Estimado Sr. Presidente del Gobierno,  
D. José Luís Rodríguez Zapatero

**Desde las organizaciones campesinas, ecologistas, de consumidores y Ong de cooperación que formamos parte de Plataforma Rural** le entregamos esta carta que refleja nuestras principales preocupaciones y demandas relacionadas con la seguridad alimentaria y la gobernanza del sistema alimentario.

Los gobiernos deben respetar, proteger y garantizar los derechos del campesinado y la Soberanía alimentaria que es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, accesibles, producidos de forma sostenible y agroecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

Para ello es necesario transformar el sistema alimentario actual para asegurar que aquellos y aquellas que producen los alimentos tengan un acceso equitativo a, y el control sobre, la tierra, el agua, las semillas, la pesca y la biodiversidad agrícola.

Es imprescindible fortalecer y promover un modelo agroecológico de suministro de alimentos para abastecer a todas las poblaciones, puesto que estas prácticas priorizan alimentar localmente a las personas, minimizan el desperdicio y las pérdidas de alimentos, y no crean los daños causados por los sistemas de producción industrial.

La agricultura campesina es resistente y es una solución para la crisis climática. Hay que defender la biodiversidad agrícola, pesquera y animal de la agresiva mercantilización de la naturaleza, los alimentos y el conocimiento, que ha sido facilitado por las «nuevas revoluciones verdes». Llamamos a una moratoria global de los OGM.

Nos consta que durante esta legislatura el gobierno que usted preside ha desarrollado un trabajo importante sobre el Derecho humano a la Alimentación y sobre la Crisis alimentaria. De todas maneras, nos preocupan profundamente las crecientes actividades de algunas empresas de capital español y europeo que operan en terceros países y que pueden poner en riesgo ese derecho fundamental y la soberanía alimentaria de las poblaciones. Actividades empresariales que pueden generar en ocasiones el desplazamiento de comunidades campesinas y pescadoras, agravando significativamente la situación de pobreza y el hambre.



“La aparición gradual de un único mercado mundial integrado de especulación, la progresiva mundialización de la mayor parte de las relaciones comerciales, económicas y sociales entre los pueblos y la aparición simultánea de empresas transnacionales privadas que, con frecuencia, tienen más poder económico y financiero que muchos Estados, especialmente en el Sur, significan que es preciso ocuparse de nuevos problemas que exceden de las fronteras territoriales tradicionales de los derechos humanos.” Son palabras del Relator internacional de las Naciones Unidas para el Derecho a la alimentación, que naturalmente hacemos nuestras y le pedimos que haga suyas.

El Relator de las Naciones Unidas para el Derecho humano a la alimentación reclama que los gobiernos deben **reconocer sus obligaciones extraterritoriales** con respecto al Derecho a la Alimentación y se deben abstener de aplicar políticas o programas que puedan tener efectos negativos sobre el derecho a la alimentación de personas que viven fuera de su territorio. Así mismo reclama que los gobiernos deben respetar, proteger y promover la realización del derecho a la alimentación.

En un mundo como el actual se impone una mayor y mejor regulación de las actividades de las empresas transnacionales para asegurar que no vulneran la legislación internacional amparándose en un terreno jurisdiccional ambiguo donde ningún actor político asume responsabilidad, así como en el propio territorio español. Ese “trans” no significa impunidad sino que requiere coordinación en las regulaciones y, en el caso del estado que usted preside, asumir que tenemos una responsabilidad dentro y fuera del estado español sobre los impactos de nuestras políticas (especialmente las comerciales) y de las grandes empresas con sede en nuestro territorio.

En consecuencia, y siguiendo las recomendaciones del Relator, le pido respetuosamente que impulse en todos los ámbitos donde usted tiene competencias el principio de Responsabilidad de los Estados, desarrollando herramientas objetivas, transparentes y públicas de control para evitar la vulneración del derecho a la alimentación y la Soberanía Alimentaria que las personas y empresas españolas puedan generar dentro y fuera del territorio español.

Relacionado con esta problemática se une que **en el marco de la reunión sobre agricultura del G20 que se celebró en París el 22 y 23 de junio**, cientos de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo movimientos campesinos, grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales, realizaron un llamamiento internacional contra el acaparamiento de tierras.

En el "Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento de tierras" que fue entregado al Gobierno francés que preside el G20, las principales organizaciones de la sociedad civil urgen a los gobiernos a poner fin inmediatamente a los acaparamientos de tierras masivos y a devolver a las



comunidades las tierras robadas. Denunciamos que por el momento, el G20 favorece el acaparamiento de tierras mediante su apoyo a la Inversión Agrícola Responsable (RAI, por sus siglas en inglés - referida como PRAI en el texto borrador del G20). Recordamos que dentro de nuestro estado también estamos viviendo de igual forma un proceso de acumulación de tierras en pocas manos y de dificultad de acceso a la tierra por parte de los agricultores/as mas jóvenes.

Es necesario desarrollar directrices obligatorias y efectivas sobre la tenencia de tierras que respeten y protejan los derechos de las personas, especialmente el derecho a los alimentos y por tanto es necesario que el gobierno que usted preside apoye está posición en su participación en el CSA.

Las organizaciones instamos al Comité de las Naciones Unidas de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) a rechazar definitivamente los principios dirigidos por el Banco Mundial relativos a la Inversión Agrícola Responsable, que son ilegítimos y no pueden aportar equidad al acaparamiento de tierras.

**Por otro lado, tras la reunión del Mecanismo de la Sociedad Civil para el Comité de seguridad Alimentaria de la ONU, celebrada en Córdoba del 27 al 30 de mayo, en la que participó activamente Plataforma Rural** queremos manifestar la importancia del renovado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de NNUU como el principal órgano para la formulación de políticas internacionales sobre la alimentación y la agricultura.

Mostramos nuestro compromiso por impulsar el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil para que sean escuchadas las voces de los movimientos de los campesinos, pescadores, pastores, indígenas, mujeres, jóvenes y pobres urbanos. En definitiva de aquellos y aquellas que, con su trabajo diario, hemos alimentado a la humanidad por generaciones.

Expresamos nuestra preocupación porque el CSA no está recibiendo el apoyo político y financiero apropiado para la pretensión de su programa de trabajo. Urgimos al Estado Español como miembro de la FAO para que su compromiso político sea respaldado.

Manifestamos que aún queda mucho trabajo por hacer en el CSA para asegurar que habrá coherencia entre los diferentes órganos de la arquitectura global institucional de la alimentación y la agricultura. En este sentido, Invitamos a los gobiernos a apoyar activamente la puesta en marcha del Marco Estratégico Global para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (GSF) acordada durante la 36<sup>a</sup> sesión plenaria del CSA, en octubre de 2010.

Y también les trasladamos nuestra profunda preocupación y malestar por el programa global sobre agricultura y seguridad alimentaria (GAFSP) que ha sido



propuesto en el seno del Banco Mundial pues su mecanismo de gobierno parece ser no democrático ni transparente y condenado en esa medida a repetir los errores del pasado. Mientras instituciones como la Organización Mundial del Comercio sigan privilegiando intereses comerciales por encima de los derechos del campesinado el hambre continuará lacerando el mundo.

Otro de las preocupaciones sobre la que queremos llamarle la atención es la cuestión de la **especulación alimentaria**. La intensificación de la actividad especulativa sobre los alimentos está generando estragos en todo el planeta, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Se debe regular activamente esta actividad, cuando no suprimirla directamente. En el camino, le pedimos que apoye la **Proposición no de Ley sobre inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios** de primera necesidad en países en vías de desarrollo, que se debatirá la **Comisión de Economía y Hacienda próximamente**.

No queremos olvidar que en este momento **estamos en pleno proceso de reforma de la Política Agraria Común**. Bien es sabido que el desmantelamiento de la Política Agraria Común (PAC) tras la reforma de 2003 y la liberalización del comercio está haciendo más vulnerables a todos los agricultores europeos cuando se producen cambios en los mercados mundiales, debido a su importante comercio agroalimentario. Las últimas reformas de la PAC basadas en el desacoplamiento de las ayudas y el abandono de la producción han sido un grave error político cuyas consecuencias están siendo pagadas por los agricultores, ganaderos y consumidores europeos, a pesar del rechazo elevado que existe a esta estrategia europea. La progresiva eliminación de las políticas de mercado supone precios cada vez más bajos e inestables para la producción, siendo los precios de referencia unos precios mundiales cada vez más volátiles y destructivos para las economías rurales. El planteamiento basado en un abastecimiento de terceros países a precios bajos y la inexistencia de unos precios internos remunerativos se está mostrando como un error político muy grave.

Es necesario un marco político de soberanía alimentaria en la nueva PAC para que se establezcan los suficientes instrumentos para la regulación de los mercados que asegure un precio justo para los agricultores y agricultoras y los consumidores y consumidoras.

Por último y no menos importante queremos evidenciar que **las negociaciones de libre comercio que está desarrollando la Unión Europea están sacrificando la agricultura familiar** sostenible y en consecuencia la

garantía de una alimentación sana, diversa y segura. Se quiere integrar a los productos agrarios en el proceso de liberalización comercial como cualquier



otra mercancía, sin tener en cuenta el carácter estratégico de la agricultura y la alimentación para la sociedad. Se abandona el modelo social de agricultura que garantiza la gestión sostenible del territorio, la sostenibilidad y la economía y el empleo de las zonas rurales. Por el contrario se ofrece a las multinacionales el control de la alimentación. La actual crisis alimentaria nos demuestra que la agricultura debe salir fuera de las negociaciones de libre comercio en la Organización Mundial del Comercio y en los acuerdos bilaterales.

Atentamente

**Jerónimo Aguado.**

**Presidente de la Plataforma Rural/Alianzas por un Mundo Rural Vivo.**

Esta alianza la componen:

ACSUD- Las Segovias, Amigos de la Tierra, Cáritas Española, CAS, CERAI, CECU, CIFAES-URPF, COAG, Colectivo Tierra de Campos, Ecologistas en Acción, EMAUS, Entrepueblos, Movimiento Jóvenes Rurales Cristianos, Movimiento Rural Cristiano, Mundubat, Red África-Europa, SEAE, SOC, SODEPAZ, URPF, Veterinarios sin Fronteras, Xarxa de Consumo Solidari.